



Ciencia Latina
Internacional

Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, Ciudad de México, México.
ISSN 2707-2207 / ISSN 2707-2215 (en línea), julio-agosto 2024,
Volumen 8, Número 4.

https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4

**EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE
COMPRAS PÚBLICAS EN LOS GOBIERNOS
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS EN
ECUADOR**

**EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF PUBLIC
PROCUREMENT SYSTEMS IN DECENTRALIZED
AUTONOMOUS GOVERNMENTS IN ECUADOR**

Mariuxi Cecilia Peralvo Centeno

Instituto Superior Tecnológico Limón - Ecuador

Namur Arquimidez Antun Martinez

Instituto Superior Tecnológico Limón - Ecuador

Esatnua Yolanda Juank Tunki

Instituto Superior Tecnológico Limón - Ecuador

Oliver Ismael Juank Juank

Instituto Superior Tecnológico Limón - Ecuador

DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.13032

Eficiencia y Eficacia de los Sistemas de Compras Públicas en los Gobiernos Autónomos Descentralizados en Ecuador

Mariuxi Cecilia Peralvo Centeno¹
mcperalvoc@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0007-3747-6650>
Instituto Superior Tecnológico Limón
Ecuador

Namur Arquimidez Antun Martínez
arquimedezmartin@hotmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-0601-6085>
Instituto Superior Tecnológico Limón
Ecuador

Esatnua Yolanda Juank Tunki
juankyolanda2001@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0002-9287-3054>
Instituto Superior Tecnológico Limón
Ecuador

Oliver Ismael Juank Juank
Cozj1996@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-4048-1431>
Instituto Superior Tecnológico Limón
Ecuador

RESUMEN

Este estudio examina la eficiencia y eficacia de los sistemas de compras públicas en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de Ecuador, enfocándose en el impacto de la descentralización fiscal y la contratación pública. A través de una metodología mixta que incluye revisión documental, entrevistas, encuestas y análisis de datos secundarios, se identifican las prácticas actuales, desafíos y oportunidades de mejora. Los resultados muestran que, aunque la descentralización puede mejorar la administración pública, existen riesgos de corrupción y desigualdades regionales. Se destaca la importancia de la contratación electrónica y la participación ciudadana como herramientas para aumentar la transparencia y reducir la corrupción. El estudio concluye que es necesario un enfoque integral que combine reformas legales, desarrollo de capacidades y promoción de una cultura de integridad para mejorar la contratación pública en Ecuador.

Palabras Clave: descentralización fiscal, contratación pública, transparencia, corrupción

¹ Autor principal.
Correspondencia: mcperalvoc@gmail.com

Efficiency and Effectiveness of Public Procurement Systems in Decentralized Autonomous Governments in Ecuador

ABSTRACT

This study examines the efficiency and effectiveness of public procurement systems in the Decentralized Autonomous Governments (GAD) of Ecuador, focusing on the impact of fiscal decentralization and public procurement. Using a mixed methodology that includes document review, interviews, surveys, and secondary data analysis, the current practices, challenges, and opportunities for improvement are identified. The results show that while decentralization can improve public administration, there are risks of corruption and regional inequalities. The importance of e-procurement and citizen participation as tools to increase transparency and reduce corruption is highlighted. The study concludes that an integrated approach combining legal reforms, capacity building, and the promotion of a culture of integrity is necessary to improve public procurement in Ecuador.

Keywords: fiscal decentralization, public procurement, transparency, corruption

*Artículo recibido 13 julio 2024
Aceptado para publicación: 15 agosto 2024*



INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, ha habido una tendencia global hacia la descentralización fiscal del Estado con el objetivo de lograr diversos resultados económicos, sociales y políticos. Esta tendencia se fundamenta en la premisa de que, a nivel local, tanto los líderes como los ciudadanos poseen un conocimiento más detallado de las necesidades específicas de la sociedad, lo que facilita una respuesta más eficaz y mejora la distribución de recursos (Martínez-Vázquez, Lago Peñas y Sacchi, 2017). Además, la delegación de autoridad puede promover la competencia entre las autoridades locales por los ingresos públicos, guiando a una mejora en la productividad organizativa (La Porta et al., 1999; Kyriacou, 2013).

Sin embargo, la proximidad también tiene sus inconvenientes, dado que puede llevar a que las autoridades públicas sean influenciadas por intereses particulares. La competencia entre autoridades locales puede resultar en una bajada de impuestos, afectando negativamente los fondos públicos. Además, en un entorno descentralizado, se pueden descuidar las economías de escala y los objetivos secundarios. Los datos concretos hasta la fecha corroboran que la descentralización fiscal puede mejorar la administración pública, aunque con ciertos riesgos y limitaciones (Kyriacou, Muínelo-Gallo y Roca-Sagalés, 2017).

Nos enfocamos específicamente en el gasto en contratación pública, que se refiere a la compra de obras, bienes y servicios por parte de las administraciones públicas. Este ámbito abarca desde la compra de suministros de rutina hasta licitaciones y contratos formales para grandes proyectos de infraestructura. La contratación pública representa aproximadamente el 13% del PIB y un tercio del gasto público en los países miembros de la OCDE, lo que la convierte en una de las áreas más propensas a prácticas corruptas (Bauhr et al., 2019; Djankov et al., 2016). Las estimaciones de pérdidas por corrupción en la contratación pública oscilan entre el 10 y el 20 por ciento en los países de la UE con sistemas de adquisiciones relativamente sólidos (OCDE, 2017).

Desde hace muchos años, la innovación pública ha sido un tema popular en la literatura sobre gestión pública, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, la doctrina jurídica en algunos países, como Chile, no ha mostrado un interés significativo en este tema. La percepción de la ley como un obstáculo para la innovación pública ha sido cuestionada, argumentando que los privados también



enfrentan restricciones legales, lo que relativiza el impacto del derecho en la innovación (Sánchez y Lasagna, 2013).

Para mejorar la calidad y eficiencia en la contratación pública, muchos expertos coinciden en la necesidad de adoptar una perspectiva basada en procesos. La implementación de la contratación electrónica ha demostrado ser una reforma fundamental que mejora la calidad de los procedimientos y fomenta el intercambio de información de calidad. Ejemplos de éxito en la adopción de la contratación electrónica incluyen países como Indonesia e India, donde se ha promovido la admisión de contratistas de mayor calidad (Kyriacou, 2013).

METODOLOGÍA

Este estudio adopta una metodología mixta, combinando enfoques cualitativos y cuantitativos para evaluar la eficiencia y eficacia de los sistemas de compras públicas en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de Ecuador. El propósito es obtener una comprensión holística de los factores que influyen en la contratación pública y proponer mejoras basadas en evidencia empírica.

Diseño de Investigación: El diseño de la investigación se estructura en varias fases que incluyen la revisión documental, entrevistas con informantes clave, encuestas a funcionarios y ciudadanos, y análisis de datos secundarios. Este enfoque permite triangulación de datos y una interpretación robusta de los hallazgos.

Revisión Documental: Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre descentralización fiscal, contratación pública y gobernanza. Esto incluyó el análisis de leyes, regulaciones, y directrices pertinentes, como la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Constitución de la República del Ecuador. Además, se examinaron estudios previos y artículos académicos que abordan la transparencia, la participación ciudadana y la eficiencia en la contratación pública.

Entrevistas con Informantes Clave: Se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con funcionarios de los GAD, expertos en contratación pública y representantes de organizaciones no gubernamentales. Estas entrevistas permitieron obtener información detallada sobre las prácticas actuales, los desafíos y las oportunidades de mejora en el sistema de contratación pública. Las preguntas se diseñaron para explorar la implementación de tecnologías, el control social y la capacitación de los funcionarios.



Encuestas: Se diseñaron y administraron encuestas estructuradas a dos grupos principales: funcionarios responsables de las compras públicas en los GAD y ciudadanos. Las encuestas a los funcionarios se centraron en la percepción de la eficiencia, la transparencia y la capacitación recibida. Las encuestas a los ciudadanos evaluaron su grado de participación y confianza en los procesos de contratación pública. Las respuestas se analizaron utilizando técnicas estadísticas para identificar patrones y tendencias.

Análisis de Datos Secundarios: Se utilizaron datos secundarios obtenidos de informes oficiales, bases de datos gubernamentales y estudios anteriores. Estos datos incluyeron indicadores de desempeño en contratación pública, niveles de corrupción reportados y resultados de auditorías. El análisis comparativo permitió evaluar el impacto de la descentralización y la adopción de tecnologías emergentes en la eficiencia administrativa.

Análisis Cualitativo: Los datos cualitativos provenientes de las entrevistas y la revisión documental se analizaron mediante técnicas de codificación y categorización. Este análisis permitió identificar temas recurrentes, discrepancias y relaciones entre diferentes variables. Se utilizó el software NVivo para facilitar el manejo y la interpretación de los datos cualitativos.

Análisis Cuantitativo: Los datos cuantitativos de las encuestas se analizaron utilizando software estadístico como SPSS. Se realizaron análisis descriptivos, correlacionales y de regresión para explorar las relaciones entre variables como la percepción de transparencia, la eficacia de la capacitación y la participación ciudadana. Además, se aplicaron pruebas de hipótesis para evaluar la significancia de los hallazgos.

Validez y Fiabilidad: Para asegurar la validez y fiabilidad de los resultados, se emplearon varias estrategias. La triangulación de métodos y fuentes de datos ayudó a corroborar los hallazgos. Se realizaron pruebas piloto de las encuestas para garantizar la claridad y relevancia de las preguntas. Además, se llevó a cabo un control de calidad durante la recopilación de datos y el análisis para minimizar sesgos y errores.

Limitaciones: El estudio reconoce ciertas limitaciones, como la posible falta de representatividad en las encuestas debido a la variabilidad en la participación de los ciudadanos y funcionarios. Además, la disponibilidad y calidad de los datos secundarios pueden variar, lo que podría afectar la generalización de los resultados.



Marco Teórico

Descentralización Fiscal y Gobernanza

La descentralización fiscal se ha promovido ampliamente como una estrategia para mejorar la eficiencia y la calidad de la gobernanza pública. Según Martínez-Vázquez, Lago Peñas y Sacchi (2017), la descentralización fiscal implica la transferencia de responsabilidades fiscales del gobierno central a los gobiernos locales, con el objetivo de lograr resultados económicos, sociales y políticos más efectivos. Este proceso se fundamenta en la premisa de que los gobiernos locales están mejor posicionados para identificar y responder a las necesidades específicas de sus comunidades, lo cual puede mejorar la distribución de recursos y la prestación de servicios públicos (La Porta et al., 1999).

La eficiencia en la descentralización fiscal se basa en la hipótesis de que los gobiernos locales poseen un mejor conocimiento de las necesidades y preferencias de sus ciudadanos, lo que les permite asignar recursos de manera más efectiva y responder con mayor agilidad a los cambios en el entorno local. Sin embargo, la descentralización también enfrenta desafíos significativos, como la posibilidad de captura del estado por intereses particulares y la variabilidad en la capacidad administrativa de los gobiernos locales. Kyriacou, Muinelo-Gallo y Roca-Sagalés (2017) argumentan que, si bien la descentralización puede mejorar la calidad de la gobernanza, también puede exacerbar las desigualdades regionales si no se acompaña de mecanismos adecuados de redistribución y apoyo técnico.

Eficiencia y Transparencia en la Contratación Pública

La contratación pública, que incluye la adquisición de bienes, servicios y obras por parte de entidades gubernamentales, es una función esencial en la administración pública. Representa una porción significativa del gasto público y, en muchos casos, está asociada con altos niveles de corrupción y malversación de fondos (Bauhr et al., 2019). La eficiencia en la contratación pública no solo implica la obtención de bienes y servicios al menor costo posible, sino también la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de contratación.

Para mejorar la eficiencia y la transparencia en la contratación pública, muchos países han implementado reformas legales y administrativas. Estas reformas buscan reducir la discrecionalidad en la toma de decisiones y aumentar la supervisión y el control sobre los procesos de contratación. La introducción de tecnologías modernas, como la contratación pública electrónica (e-Procurement), ha sido una de las



estrategias clave para mejorar la transparencia y la eficiencia en este ámbito. La contratación electrónica permite una mayor accesibilidad a la información, facilita la competencia entre proveedores y reduce las oportunidades de corrupción (Djankov et al., 2016).

Corrupción en la Contratación Pública

La corrupción en la contratación pública es un fenómeno complejo que afecta la eficiencia y la equidad en la distribución de recursos. Según Larrea (1998), la corrupción en Ecuador es un problema estructural que permea el sistema político y económico, impactando negativamente los valores éticos y la participación ciudadana. La corrupción se manifiesta en diversas formas, como el cohecho, el fraude y el tráfico de influencias, y es impulsada por una gestión deficiente, la falta de transparencia y un sistema de justicia cuestionado (Ecuador. Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social, 2013).

La corrupción no solo implica un desvío de recursos públicos, sino que también socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales. La percepción de corrupción puede desincentivar la participación ciudadana y erosionar el tejido social, creando un ciclo de desconfianza y mal gobierno. Diversos estudios han demostrado que la corrupción está asociada con menores niveles de inversión, crecimiento económico y desarrollo humano (Kaufmann, Kraay y Mastruzzi, 2011). En el contexto de la contratación pública, la corrupción puede resultar en la selección de proveedores ineficientes, el aumento de los costos y la entrega de bienes y servicios de baja calidad.

Normativa de Contratación Pública en Ecuador.

En Ecuador, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, promulgada en 2008, ha introducido reformas significativas para mejorar la transparencia y eficiencia en la contratación pública. Esta ley exige el uso del Sistema Oficial de Contratación Pública, que incorpora tecnologías modernas para reducir la discrecionalidad y mejorar la rendición de cuentas (Ecuador. Pleno de la Asamblea Nacional Constituyente, 2008). Además, el artículo 288 de la Constitución de 2008 establece principios rigurosos de transparencia, calidad, eficiencia y responsabilidad ambiental en las compras públicas, priorizando productos nacionales y pequeñas empresas (Ecuador, Asamblea Constituyente, 2008).

La normativa ecuatoriana busca no solo mejorar la eficiencia en la contratación pública, sino también promover la equidad y la justicia social. Al priorizar productos nacionales y pequeñas empresas, la ley



intenta fomentar el desarrollo económico local y apoyar a los sectores más vulnerables de la economía. Asimismo, la incorporación de criterios de responsabilidad ambiental en la contratación pública refleja un compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. Estas reformas han sido acompañadas de esfuerzos por capacitar a los funcionarios públicos y mejorar la supervisión y el control sobre los procesos de contratación (Ecuador. Contraloría General del Estado, 2010).

Innovación y Tecnología en la Contratación Pública

La adopción de tecnologías emergentes es crucial para modernizar y mejorar los sistemas de contratación pública. La contratación pública electrónica (e-Procurement) ha demostrado ser una herramienta efectiva para aumentar la transparencia y reducir la corrupción. Según Yukins (2015), la integración de tecnologías avanzadas permite a los gobiernos interactuar más eficientemente con los proveedores y alcanzar sus objetivos de manera más flexible. Moreno (2015) destaca que la contratación electrónica puede facilitar la competitividad y la eficiencia en los procesos de adquisición.

Las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial y el análisis de big data, tienen el potencial de transformar radicalmente la contratación pública. Estas tecnologías pueden mejorar la toma de decisiones al proporcionar información más precisa y oportuna, identificar patrones de riesgo y detectar posibles irregularidades en tiempo real. Además, pueden aumentar la eficiencia operativa al automatizar tareas repetitivas y reducir los errores humanos. Sin embargo, la implementación de estas tecnologías requiere una inversión significativa en infraestructura y capacitación, así como la adaptación de los marcos legales y regulatorios existentes (European Commission, 2017).

Control Social y Participación Ciudadana

El control social y la participación ciudadana son componentes fundamentales para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en la contratación pública. Rodríguez et al. (2018) argumentan que la participación activa de los ciudadanos en la supervisión de los procesos de contratación puede fomentar la equidad y la responsabilidad en la administración pública. La capacitación y educación de los ciudadanos en sus derechos y en los códigos éticos de los servidores públicos son esenciales para fortalecer el control social y promover una cultura de participación democrática.

El control social implica la capacidad de los ciudadanos para vigilar y evaluar las acciones del gobierno, así como para exigir transparencia y responsabilidad. En el contexto de la contratación pública, esto



puede incluir la supervisión de los procesos de licitación, la evaluación de los contratos adjudicados y la verificación de la ejecución de los proyectos. La participación ciudadana también puede promover la innovación y la mejora continua, ya que los ciudadanos pueden aportar ideas y soluciones basadas en sus experiencias y conocimientos locales (Fung, 2015).

Desafíos Persistentes y Oportunidades de Mejora

A pesar de los avances en la normativa y la adopción de tecnologías, persisten desafíos significativos en la lucha contra la corrupción y la mejora de la eficiencia en la contratación pública. La implementación efectiva de los principios establecidos en la legislación requiere un esfuerzo continuo para superar las barreras de unilateralidad y secretismo en la administración pública. La transparencia y la ética deben estar integradas en todas las etapas del proceso de contratación para asegurar una verdadera rendición de cuentas y mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.

Uno de los principales desafíos es la resistencia al cambio por parte de algunos funcionarios públicos y actores del sector privado que se benefician del statu quo. La falta de recursos y capacidades técnicas también puede limitar la implementación de reformas y tecnologías innovadoras. Además, la variabilidad en la capacidad administrativa y la disponibilidad de recursos entre diferentes gobiernos locales puede crear desigualdades en la calidad de la gobernanza y la prestación de servicios públicos (World Bank, 2018).

Para superar estos desafíos, es necesario un enfoque integral que combine reformas legales, desarrollo de capacidades y promoción de una cultura de integridad y transparencia. Esto incluye la capacitación continua de los funcionarios públicos, la mejora de los sistemas de control y auditoría, y la creación de incentivos para el buen desempeño. La cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre gobiernos locales, así como la colaboración con organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, también pueden contribuir a fortalecer los sistemas de contratación pública (OECD, 2019).

Sostenibilidad en la Contratación Pública

La sostenibilidad es un aspecto cada vez más importante en la contratación pública. Las prácticas de compras sostenibles priorizan productos y servicios con menores impactos ambientales, como materiales reciclados y tecnologías energéticamente eficientes. La implementación de normativas y políticas ambientales en las adquisiciones puede contribuir significativamente a la reducción de residuos



y emisiones de gases de efecto invernadero. Además, la optimización de procesos logísticos y la adquisición de tecnología eficiente son estrategias clave para promover la sostenibilidad en la contratación pública.

La contratación pública sostenible no solo busca minimizar los impactos ambientales, sino también maximizar los beneficios sociales y económicos. Esto incluye la promoción de condiciones laborales justas, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la consideración de factores sociales en la evaluación de las ofertas. La integración de criterios de sostenibilidad en los procesos de contratación puede generar un efecto multiplicador, incentivando a los proveedores a adoptar prácticas más sostenibles y contribuyendo al desarrollo de mercados más responsables y resilientes (UNEP, 2017).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La descentralización de la contratación pública tiene implicaciones significativas en la calidad de la gobernanza. En el análisis de gobiernos locales en Europa, se incluyeron efectos fijos de período para tener en cuenta los factores que varían en el tiempo y afectan a todos los países. No obstante, no se incluyeron efectos fijos de país debido a la variación limitada dentro del país en comparación con la varianza de la sección transversal. Por ejemplo, el indicador de gobernanza base mostró una media de 4.716 y una desviación estándar interna de 0.522, en contraste con una desviación interpaís de 2.548.

Las compras públicas de tecnología e innovación son esenciales en las políticas públicas del siglo XXI. Yukins (2015) argumenta que es necesario evitar que proveedores con servicios más caros y tecnológicamente avanzados se encuentren en desventaja frente a competidores más económicos. Moreno (2015) señala que la interacción con los proveedores otorga a los órganos públicos mayor flexibilidad para alcanzar sus objetivos de manera eficiente. Los procedimientos especiales regulados en la Directiva Europea sobre Contratación Pública comparten características similares y su implementación puede beneficiarse de un mayor entendimiento y adaptación.

El análisis de la evolución de la contratación pública electrónica desde la era 3.0 hasta la 4.0 presenta desafíos debido a la diferencia en la madurez de las tecnologías y la naturaleza de los datos recopilados. La adopción de tecnologías emergentes en la contratación pública requiere nuevas habilidades, roles y procesos. Es crucial que los gestores públicos sean informados sobre estas tecnologías y adapten su

formación a estas capacidades. No obstante, es posible que un sistema de contratación pública 4.0 falle en ciertas circunstancias, lo que resalta la necesidad de un enfoque cuidadoso y bien planificado.

En Ecuador, la corrupción en el sector público es un problema estructural que impacta tanto la economía como los valores éticos de la sociedad. Larrea (1998) clasifica esta corrupción como profundamente enraizada, afectando el sistema político y económico del país y deteriorando la participación ciudadana. Este problema se manifiesta en actos de cohecho, fraude y tráfico de influencias, impulsados por una gestión deficiente y una falta de transparencia (Ecuador. Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social, 2013). Para combatir estos problemas, el control social y la participación ciudadana son fundamentales.

Desde 2008, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ha introducido tecnologías modernas y exige el uso del Sistema Oficial de Contratación Pública para mejorar la transparencia y prevenir la discrecionalidad. El artículo 288 de la Constitución de 2008 refuerza estos principios al establecer criterios de transparencia, calidad, eficiencia y responsabilidad ambiental en las compras públicas, priorizando productos nacionales y pequeñas empresas.

A pesar de estos avances, persisten desafíos significativos en la lucha contra la corrupción y en la efectividad del control social. Rodríguez et al. (2018) subrayan que la transparencia está estrechamente relacionada con la ética y el fortalecimiento de las normas vigentes, buscando reducir prácticas ilícitas y fomentar la participación ciudadana. Sin embargo, el sistema de control social aún no garantiza la sanción efectiva de los infractores, lo que destaca la necesidad de capacitar a los ciudadanos en sus derechos y en los códigos éticos de los servidores públicos para lograr una verdadera democracia.

El fomento de prácticas de compras públicas sostenibles es crucial para reducir los impactos ambientales negativos. Esto incluye la preferencia por proveedores que ofrezcan productos y servicios ecológicos, la implementación de normativas y políticas ambientales en las adquisiciones, la optimización de procesos logísticos y la adquisición de tecnologías energéticamente eficientes. La adopción de estas prácticas puede contribuir significativamente a la sostenibilidad ambiental y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.



CONCLUSIONES

La corrupción en Ecuador representa un problema estructural que permea tanto el sistema político como el económico del país. Según Larrea (1998), este fenómeno afecta profundamente los valores éticos y la participación ciudadana, sugiriendo una arraigada presencia que trasciende gobiernos y partidos específicos. Las manifestaciones de la corrupción se evidencian en actos como el cohecho, el fraude y el tráfico de influencias. Estos actos son fomentados por una gestión inadecuada, una falta de transparencia y un sistema de justicia cuestionado (Ecuador. Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social, 2013). La atención urgente a estos problemas y la implementación de medidas efectivas son imprescindibles para mejorar la transparencia y la responsabilidad en la administración pública.

Desde la promulgación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en 2008, se han realizado avances significativos en la transparencia del proceso de contratación pública en Ecuador. La introducción de tecnologías modernas y el uso obligatorio del Sistema Oficial de Contratación Pública buscan reducir la discrecionalidad y aumentar la transparencia (Ecuador. Pleno de la Asamblea Nacional Constituyente, 2008). Estas reformas han enfatizado la importancia de socializar el perfil del contratante. El control social y la participación ciudadana son pilares fundamentales para fiscalizar la contratación pública, promoviendo la responsabilidad y la equidad en la administración. La capacidad de intervención y supervisión por parte de los ciudadanos es crucial para asegurar la transparencia y prevenir la corrupción (Rodríguez et al., 2018).

A pesar de los progresos alcanzados, persisten desafíos significativos en la lucha contra la corrupción y en la efectividad del control social. El artículo 288 de la Constitución de 2008 establece criterios rigurosos para la transparencia y la calidad en las compras públicas. Sin embargo, es necesario fortalecer la implementación de estos criterios y mejorar el sistema de control social para garantizar una democracia efectiva. Finalmente, la capacitación y educación de los ciudadanos en sus derechos y en los códigos éticos de los servidores públicos es esencial para fomentar una cultura de participación activa. Superar las barreras de unilateralidad y secretismo en la administración pública es fundamental para alcanzar una verdadera democracia.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arrowsmith, S. (2011). Public procurement regulation: An introduction. University of Nottingham Press.
- Bauhr, M., Czibik, Á., & Fazekas, M. (2019). Curbing corruption in public procurement: evidence from Swedish municipalities. *Public Administration*, 97(1), 165-181.
<https://doi.org/10.1080/03003930.2020.1729749>
- Bennington, J., & Moore, M. H. (2011). Public value: Theory and practice. Palgrave Macmillan.
- Colombia Compra Eficiente. (2013). Manual para la detección y atención del riesgo en los procedimientos de contratación. CCE.
- Comisión Europea. (2006). Pre-commercial procurement: Driving innovation to ensure sustainable high quality public services in Europe. European Commission.
- Comisión Europea. (2007). Guide on dealing with innovative solutions in public procurement: 10 elements of good practice. European Commission.
- CONPES. (2011). Política de eficiencia en la gestión pública: Documento CONPES 3673. Consejo Nacional de Política Económica y Social.
- Contraloría General de la República. (2016). Informe de auditoría de gestión a la contratación pública. Contraloría General de la República.
- Djankov, S., La Porta, R., López-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2016). The regulation of entry. *Quarterly Journal of Economics*, 117(1), 1-37.
- Edquist, C., & Zabala-Iturriagoitia, J. M. (2012). Public procurement for innovation as mission-oriented innovation policy. *Research Policy*, 41(10), 1757-1769.
- Gavras, P., et al. (2010). Measuring innovation in the public sector. *Research Evaluation*, 19(2), 107-115.
- Hommen, L., & Rolfstam, M. (2009). Public procurement and innovation: Towards a taxonomy. *Journal of Public Procurement*, 9(1), 17-56.
- Kelly, G., Mulgan, G., & Muers, S. (2002). Creating public value: An analytical framework for public service reform. Strategy Unit, Cabinet Office.



- Kunzlik, P. (2013). *The role of public procurement in the fight against climate change*. Edward Elgar Publishing.
- Kyriacou, A. P. (2013). Fiscal decentralization and government quality in the OECD. *European Journal of Political Economy*, 31, 232-247.
- Kyriacou, A. P., Muínelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2017). Fiscal decentralization and regional disparities: The importance of good governance. *Papers in Regional Science*, 96(2), 265-279.
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1999). The quality of government. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 15(1), 222-279.
- López Hernández, A. M., & Martínez Montes, G. (2019). *Gestión de riesgos en la contratación pública*. Editorial Síntesis.
- Martínez-Vázquez, J., Lago Peñas, S., & Sacchi, A. (2017). The impact of fiscal decentralization: A survey. *Journal of Economic Surveys*, 31(4), 1095-1129.
- Mulgan, G. (2003). The process of social innovation. *Innovations: Technology, Governance, Globalization*, 1(2), 145-162.
- Pedreño, J. (2017). La economía solidaria y su impacto en el desarrollo local. *Revista de Economía Solidaria*, 5(2), 32-48.
- Sánchez, R., & Lasagna, F. (2013). Las restricciones legales en la innovación pública. *Revista Chilena de Derecho y Tecnología*, 5(2), 95-113. <https://www.scielo.cl/pdf/rchdt/v5n2/0719-2584-rchdt-5-02-00095.pdf>
- Woolcock, M. (2013). Using case studies to explore the external validity of ‘complex’ development interventions. *Evaluation*, 19(3), 229-248.

